

1º.- Con fecha 2 de octubre de 2023, tuvo entrada en RENFE-Operadora, E.P.E., al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, («Ley de Transparencia»), una solicitud de don _____, que quedó registrada con el número 00001-00082745. A partir de dicha fecha comenzó a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la citada ley para su resolución, término que fue ampliado, de acuerdo con el párrafo segundo del mencionado artículo.

2º.- En virtud de la referida solicitud, se requiere acceso a la siguiente información:

«Asunto

atraso tren viernes 29

Información que solicita

Quisiera saber el costo, transportes alternativos, pago por retraso, etc al salir con 22 minutos de retraso un tren AVE de Valladolid-estación Campo Grande- tras el atraso producido tras llamar su Excelentísima Señoría el excelso don Oscar Puente a la policía y seguridad tras que un pasajero le formulara una pregunta cuestionando su opinión.»

3º.- Tras consultar a los servicios competentes de Renfe Viajeros, S.M.E., S.A., («Renfe Viajeros»), procede inadmitir la solicitud planteada en virtud del artículo 13 de la Ley de Transparencia, sin perjuicio de que resultaría también de aplicación el límite previsto en su artículo 14.1 h).

El artículo 12 de la Ley de Transparencia reconoce el derecho de todas las personas a acceder a información pública, entendiendo por tal, según se establece en su artículo 13, *«los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones»*.

Partiendo de los referidos preceptos, la Ley de Transparencia exige la concurrencia de dos requisitos para que se conceda acceso a la información solicitada: (1) que se encuentre en *«poder»* de alguno de los sujetos obligados, y (2) que haya sido elaborada en *«el ejercicio de sus funciones»*.

Se solicita un informe, no documentos concretos, siendo doctrina consolidada que el derecho de acceso no alcanza a obtener la elaboración de informes, sin soporte de expediente administrativo alguno, siendo estos informes información futura, aún no generada o adquirida.

Señalado lo anterior, debe tenerse en cuenta que los viajeros disponen de un plazo de tres meses desde la fecha del viaje para solicitar indemnización, por lo tanto, resulta imposible en este momento elaborar dicho informe, que requiere la cuantificación de los pagos por retraso, no habiendo finalizado el periodo para su solicitud.

En consecuencia, al no existir la información requerida, no se cumpliría el segundo de los requisitos para conceder el acceso requerido, circunstancia que debe conducir a la inadmisión de la solicitud, al carecer de objeto sobre el que proyectar el ejercicio del derecho de acceso. En este sentido se ha pronunciado la Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno («CTBG») en sus resoluciones R/0715/2023 y R/802/2021, respectivamente:

«En consecuencia, no existiendo la información solicitada en el escrito inicial, tal y como afirma el Ministerio —y este Consejo no tiene motivos para poner en duda—, no hay objeto sobre el que proyectar el derecho y, en consecuencia, la reclamación ha de ser desestimada, sin que proceda entrar a examinar el resto de las cuestiones suscitadas»

«En consecuencia, atendiendo a la definición del concepto de información pública recogido en el citado artículo 13 de la LTAIBG, debemos recordar que es doctrina consolidada de este Consejo que no goza de aquella condición la información futura, aún no generada o adquirida, sino los contenidos o documentos que obren en poder del sujeto requerido en el momento en que se solicitan.»

En relación con la decisión de inadmisión, el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha señalado, entre otras, en la Resolución R/0276/2018, que *«la inadmisión de una solicitud de información no sólo podrá fundarse en las causas expresamente previstas en el artículo 18 de la LTAIBG, sino, igualmente, cuando el propio objeto del derecho de acceso no recaiga sobre «información pública», según la configuración prevista en el artículo 13 de la LTAIBG.»*

4º.- Sin perjuicio de lo anteriormente indicado, resultaría, además, de aplicación, el límite del artículo 14.1 h). Los datos que se solicitan podrían facilitar que se cuestione sin motivo la prestación del servicio de interés general, pudiendo el informe que se solicita ser utilizado para tratar de conseguir un injustificado descrédito, máxime teniendo en cuenta que la incidencia que motivó el retraso no guarda nexo de causalidad o imputabilidad respecto a Renfe Viajeros, sino con actuaciones de terceros.

En relación con el test del daño, atendiendo a la naturaleza de la información solicitada, el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha puesto de manifiesto que la Administración no tiene obligación de publicar aquella información que pueda perjudicar los intereses económicos y comerciales de las empresas que dependen de ella. En concreto, dicho organismo considera que, si se hiciese pública información sobre eventuales incidencias, como cancelaciones o retrasos en los servicios ferroviarios, en la mayoría de los casos, ocasionadas por causas ajenas a la empresa que los presta, se crearía una percepción en el público que afectaría de manera significativa e injustificada a sus intereses económicos y comerciales, por lo que dicha información debe ser considerada y tratada como un secreto empresarial.

En este entorno, facilitar información detallada sobre la dificultad de la explotación de este negocio, imputable, en muchos casos, a causas ajenas al operador, como el estado de las

infraestructuras, instalaciones o a determinadas actuaciones de terceros, podría perjudicar a la mercantil prestadora del servicio, dejándola en posición injustificadamente desventajosa respecto a otros modos de transporte, con el añadido de que si se trata de información que puede ser interpretada como significativa de deterioro de alguna faceta de la explotación, también puede tener un efecto de injustificado descrédito.

Ello supondría, además, una desventaja competitiva injustificada para Renfe Viajeros respecto del resto de operadores de transporte con los que compite, los cuales no vienen obligados a facilitar información como la solicitada. No debe olvidarse que Renfe Viajeros compite en el mercado desde un plano estrictamente privado, debiendo respetarse en todo caso las condiciones de competencia en la prestación de servicios de transporte ferroviario, de acuerdo con lo establecido en la normativa sectorial, comunitaria y nacional, con respeto a los principios de objetividad, transparencia y no discriminación.

Adicionalmente, cabe advertir que en el presente caso no concurre ningún motivo o razón, de naturaleza pública o privada, que permita concluir que la solicitud de acceso planteada deba prevalecer sobre la protección de los intereses económicos y comerciales de Renfe Viajeros (test del interés público). Y es que existen estadísticas e información sobre puntualidad y fiabilidad de la red y del servicio, que satisfacen sobradamente el interés público y privado.

En consecuencia, las circunstancias descritas ponen de manifiesto no sólo la procedencia de la inadmisión de la solicitud de acceso planteada, al amparo de lo establecido 13 de la Ley de Transparencia, sino también de la aplicación complementaria del límite al derecho de acceso previsto en el artículo 14.1 h) de dicha ley.

5º.- Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de notificación de la presente Resolución. Ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o reclamación que se estime procedente.

Madrid, en la fecha de la firma electrónica.

El Gerente de Área de Relaciones Institucionales de RENFE-Operadora E.P.E.

Sergio Bueno Illescas

En virtud de Resolución de 12 de enero de 2023, de la Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora, E.P.E., sobre delegación de competencias, publicada en el Boletín Oficial del Estado n.º 21 de 25 de enero de 2023.